



Bogotá, D.C., 20 de Mayo de 2022

Doctor

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente

Sala de Casación Penal (Sala de decisión de Tutela # 1)

Corte Suprema de Justicia

E. S. D.

TUTELA : **NÚMERO 11001020400020220095500 (NI. 123956**
CAUSAS PENALES: CUI 0500031200012016000801 Y 05440-6000340201100020
ACCIONATE : **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO**
ACCIONADOS : Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá,
y la Sociedad de Activos Especiales SAE-SAS
ASUNTO : **CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA**

Respetado Señor Magistrado:

JOSELYN GÓMEZ PICO, obrando como Procurador 30 Judicial II Penal de Bogotá, conforme al traslado que se nos ha concedido, procedo a emitir pronunciamiento respecto a la acción de tutela promovida por la señora: **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO**, contra la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y la Sociedad de Activos Especiales SAE-SAS, por presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de especial protección constitucional dentro del radicado # 05000312000120160008-01.

La accionante solicito como medida cautelar que se ordene a la Sociedad de Activos Especiales SAE-SAS., la suspensión de la diligencia de desalojo forzado que se realizará el 10 de mayo de 2022, de la cual, se enteró el 5 de mayo, para lo cual la honorable Corte Suprema de Justicia, y con el ánimo de obtener los elementos materiales probatorios para resolver de fondo la medida provisional requirió por correo electrónico a la Sociedad de Activos Especiales SAE-SAS para que informe sobre la realización de la diligencia de desalojo. Y esta sociedad en respuesta a los solicitado ordena suspender la diligencia, pues los ocupantes solicitaron un tiempo, de un mes calendario, para proceder con la entrega del predio, para tener en forma organizada



su salida, por ello, la diligencia se suspendió, y la misma, se reprogramó para el viernes 10 de junio de 2022 a las 9:00 a.m., razón por la cual el operado judicial no concedió dicha medida.

Igualmente, Sala de Casación Penal (Sala de decisión de Tutela # 1), en aras del debido proceso vinculó, el **Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado De Extinción de Dominio de Antioquia**.

De este trámite realizado por Sala de Casación Penal (Sala de decisión de Tutela # 1), estima el Ministerio Público está ajustado a derecho, y es una garantía al debido proceso para así poder emitir un fallo de fondo.

Antes que todos, observemos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela que tornen viable el análisis de la eventual vulneración o amenaza a los derechos de rango fundamental aludidos por el actor.

La Corte Constitucional en sentencia **SU 024 del 2018** ha indicado textualmente en cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales lo siguiente:

“...4.1. Requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Los requisitos generales de procedencia señalados en la sentencia C-590 de 2005, se definen como condiciones de procedimiento que buscan hacer compatible la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con la eficacia de principios de estirpe constitucional y legal como la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, y la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama judicial.^[44] Estos requisitos son los siguientes:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones^[45]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de



relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios-ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable^[46]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

*c. **Que se cumpla el requisito de la inmediatez**, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración^[47]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. (La negrita y Subraya es nuestra)*

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora^[48]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible^[49]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es



menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela^[50]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”^[51].

En la sentencia referida anteriormente se estableció que después de probar el cumplimiento de los requisitos generales señalados, el accionante debe demostrar que tuvo lugar alguna de las causales específicas de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la autoridad judicial al proferir la decisión cuestionada.”.

CASO CONCRETO

La ciudadana **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO**, presenta en el mes de Mayo del 2022 la presente acción de tutela en contra de la Sociedad de Activos Especiales por la vulneración de los derechos fundamentales de la vivienda digna y al mínimo vital de personas de especial protección constitucional, para lo cual transcribimos los hechos más relevantes que ella expone en su acción de tutela:

“...1.1 Soy madre cabeza de familia, de quien depende mi hijo en condición de discapacidad y desde hace aproximadamente quince (15) años habitó con mis tres hijos en mi vivienda en Marinilla, Antioquia. Cabe resaltar que soy una persona intachable y no tengo ningún tipo de antecedente judicial y nunca he sido sometida a ninguna investigación penal. Tampoco he contribuido de manera alguna a que en mi hogar se cometan actividades ilícitas.

1.2 El 12 de mayo de 2001 en el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 (ubicado en la Calle 21 No. 46A-89 del municipio de Marinilla, Antioquia y de propiedad de Luz Miriam Castaño Quintero) se halló 421 gramos de marihuana, los cuales habían sido comprados por uno de mis hijos, Elder Julián Toro Castaño, para el consumo personal.

1.3 Por *conservar* la sustancia prohibida sin tener la autorización de la autoridad competente, Elder Julián Toro Castaño fue declarado responsable penalmente y obligado a pagar multa por medio de la sentencia anticipada del 19 de septiembre de 2011 (Anexo 1).



1.4 Por estos hechos, el 31 de octubre de 2021, la Fiscalía General de la Nación decidió de manera oficiosa iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio de mi casa, así como su embargo y secuestro....”.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Como lo viene expresando la Corte Constitucional y nuestra Carta Política (Artículo 86) la acción de tutela procede cuando los derechos constitucionales fundamentales se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. No obstante, la Corte Constitucional ha admitido excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y que se apartan notablemente de los mandatos constitucionales. Lo anterior, en atención a los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.

Analizando el caso concreto de la tutela, tal como lo esboza el accionante y conforme a lo constatado, en nuestro sentir este mecanismo constitucional no es el idóneo para resolver los planteamientos del actor, **por el carácter de subsidiaridad, inmediatez, procedencia excepcional de la acción de tutela**, y puesto que además cuanta con otros mecanismos judiciales.

La honorable Corte Constitucional, en su sentencia referida, y sobre todo en el punto **c)** ha expuesto lo siguiente:

“...c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración^[47]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos...) (La negrita y Subraya es nuestra)

Como se puede observar la presente acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, sobre todo el término en que se debió presentar. Veamos:



Sentencia del **19 de Septiembre del 2011**, donde se condenó al **señor ELDER JULIÁN TORO CASTAÑO** (Hijo de la accionante), por el delito de Tráfico, Fabricación y porte de Estupefaciente, por el juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Marinilla (Antioquia).

Sentencia del 24 de Julio del 2017, emitida por el juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, donde no prosperó la Extinción del Dominio del inmueble objeto de inconformidad.

Sentencia del 4 de Julio del 2019, emitida por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogota, en la que revoca la referida sentencia y declara la Extinción del Derecho de Dominio del inmueble referido.

Conforme a lo expuesto, es claro que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, por lo que muy comedidamente se solicita al Honorable Magistrado Ponente despachar desfavorablemente la solicitud de tutela promovida por la ciudadana **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO**.

Atentamente,

JOSELYN GOMEZ PICO
Procurador 30 Judicial II Penal de Bogotá
Dirección Carrera 10 #16-82 Piso 7 Bogotá D.C.
Teléfono 5878750 Extensión 14709 y 14874
jgomezp@procuraduria.gov.co
Proyectó Sustancidor Rubr Gustavo Simahan V